

Editorial

Valoración del siglo XX desde los mártires

En momentos en los cuales se hacen valoraciones del siglo XX e incluso del milenio, *ECA* quiere participar en esta tarea y aportar su propio juicio al respecto. Pero no lo quiere hacer desde la perspectiva predominante, presentando una simple lista de fechas, acontecimientos y, o personalidades, ni señalando acontecimientos o personalidades únicas. Estas valoraciones proporcionan muy poca explicación, de tal manera que es muy difícil comprender la relevancia de sus datos; tampoco discuten los criterios a partir de los cuales se elaboran esas listas o se escogen los acontecimientos o las personas. Se dirá que la ausencia de explicación preserva la objetividad, sin percatarse que en la simple selección y en su ordenación ya se encuentra implícita una opción determinada.

A diferencia de estas valoraciones que pasan por alto sus criterios, *ECA* explicita los suyos. Dos son los criterios desde los cuales hace su valoración del siglo XX: las mayorías populares y la inspiración cristiana, y la tradición de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". El primero enfatiza la perspectiva de la vida y la dignidad de las mayorías empobrecidas y, por eso mismo, excluidas. El segundo privilegia la constitución de los seres humanos en una gran familia, unida por la fraternidad y la solidaridad. Estos criterios se contraponen a otros como el éxito, la ganancia máxima, la popularidad, etc. Los criterios aquí asumidos son los que permiten entroncar la visión de *ECA* sobre el siglo XX con los mártires de la universidad y del pueblo salvadoreño.

1. Juicio general sobre el siglo XX

El siglo XX es un siglo de avances importantes e innegables en el saber científico y tecnológico, en el saber y la experiencia política y humana, y en la creación ideológica y cultural. A lo largo de estos cien últimos años, la investigación científica y tecnológica ha arrojado resultados que han contribuido a la resolución de algunos de los problemas más graves de la humanidad, tanto en su vertiente biológica como personal y social. En el orden

político también ha habido avances destacados, los cuales han sido reconocidos institucionalmente. Estos avances pueden sintetizarse en la aceptación, teóricamente universal, de los derechos humanos, cuyo proyecto más reciente es el esfuerzo por internacionalizar la justicia. En el ámbito ideológico cultural también se observan progresos, en particular en los campos de las etnias, el género, la protección a la niñez, la religión y el medio ambiente.

Reconocer estos avances es una exigencia de la objetividad y responde a cierta necesidad pragmática, para que el futuro deseado no sea un escapismo primitivista. Los cambios que haya que hacer en el futuro inmediato no parten de cero, sino que ya tienen a su favor estos avances indiscutibles. En la actualidad, la vida es más fácil y duradera que hace un siglo, por lo menos para algunos sectores importantes de la humanidad; aunque no para todos, ni siquiera para la inmensa mayoría de ella. Al no ser universales, los logros alcanzados en el siglo XX son, al menos, ambiguos. No es un siglo que se haya caracterizado por un desarrollo lineal y homogéneo, sino por uno muy desigual y desequilibrado. Las simples listas de fechas, acontecimientos y personas obvian este hecho incuestionable y tienden a proyectar una visión del siglo de progreso ascendente.

Junto a grandes e importantes progresos, el siglo XX es el siglo más cruel de la historia humana. Cuenta en su haber con dos guerras mundiales, incluyendo Hiroshima y Nagasaki, y con una multitud de guerras coloniales, civiles y regionales, motivadas por desmedidas ambiciones económicas y absurdas pretensiones políticas o por diferencias étnicas y religiosas de toda clase. Es un siglo de represiones masivas que van desde el fascismo y el nazismo, pasando por Stalin y las revoluciones en el sudeste asiático, hasta los regímenes latinoamericanos de seguridad nacional. La segunda guerra mundial dio paso a la guerra fría y ésta a una especie de guerra social de naturaleza informal, pero igualmente devastadora. Las potencias mundiales se armaron primero nuclear y biológicamente con el pretexto de desanimar el ataque de sus adversarios; los ejércitos de todas las naciones siguieron su ejemplo, pero en una escala menor, pues no tenían recursos para igualarlas; y, por último, las sociedades, sobre todo las del tercer mundo, pero no de manera exclusiva, se han ido armando, desatando luchas intestinas crueles y destructivas.

De esta suerte, cuando la humanidad no ha muerto por causa de las guerras, muere víctima de la violencia social o del hambre, de la enfermedad y de la negación de servicios básicos. Este conjunto de carencias tiene mucho que ver con la muerte de unos 17 millones de personas al año, en los últimos años del siglo XX, causada por enfermedades contagiosas y parasitarias curables, según el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano. Está comprobado que, en la actualidad, muere más gente por causa del hambre, la enfermedad y la violencia social que por las guerras ocurridas a lo largo del siglo; no obstante que las estadísticas suman decenas de millones de víctimas.

Al finalizar el siglo XX, la extensión y la profundización de la pobreza y la depredación de los recursos naturales, en particular de los no renovables, han llevado a unos niveles de inhumanidad hasta ahora desconocidos. Los avances científicos, tecnológicos y políticos no han sido acompañados por un crecimiento en humanidad, sino todo lo contrario. Pareciera que el desarrollo de la civilización, de la cual sólo se benefician minorías, conlleva la deshumanización general. El desarrollo que la civilización del capital ha alcanzado al finalizar el siglo XX implica al mismo tiempo un elevado nivel de inhumanidad y deshumanización, no obstante que en el período inmediatamente anterior a la primera guerra mundial y en el que siguió a la segunda alcanzó cotas tan altas que, después de esta última, algunos pensaron que el éxito económico, social, político y cultural estaba asegurado. La década de 1970 demostró lo contrario.



La globalización, presentada como la panacea del desarrollo capitalista al final del siglo, no es un concepto serio, tal como sus promotores parecen creer, ni tiene capacidad para generar riqueza y prosperidad en las naciones subdesarrolladas y pobres. K. Galbraith advierte que la globalización es un invento de los estadounidenses para disimular su política de penetración económica en otros países, y Amin asegura que el determinismo neoliberal sirve para legitimar las estrategias del capital imperialista dominante. La última reunión del siglo de la Organización Mundial del Comercio, en Seattle, confirma que estos reconocidos economistas no están lejos de la verdad.

El impacto de esta modalidad del capitalismo de final de siglo en la mayoría de la humanidad —desempleo, disminución de los salarios reales, concentración del capital, derrumbamiento de los sistemas de educación y salud— no se atribuye a nadie en particular, sino a la globalización, una abstracción poco comprendida por la mayor parte de la población. Uno de sus grandes defensores ya lo advirtió con calculado cinismo: si no hay a quien atribuir responsabilidades, tampoco tiene sentido hablar de justicia o injusti-

cia. Esto mismo hace que sus víctimas crean que sus efectos son obra de fuerzas ciegas, derivadas de un orden natural fuera del alcance humano. Esta creencia les impide analizar sus perniciosas consecuencias y les cierra, simultáneamente, la posibilidad para pensar en políticas alternativas y sobre todo para ejercer la sana crítica. Así, pues, el alcance real de la globalización es mucho más modesto de lo que sus patrocinadores pretenden hacer creer y, en esta medida, tiene también mucho de mito.

La caída del muro de Berlín fue celebrada como el final de los problemas más graves de la humanidad. El capitalismo había salido triunfante de la guerra fría, el único que podía alzarse con la victoria en una lucha de poder. Era la prueba que los creyentes en el mercado necesitaban para proclamar su predominio absoluto. La libertad individual y el mercado libre debían privar en todos los ámbitos de la vida humana. Por segunda vez, el éxito parecía estar al alcance de la mano y garantizado.

Hace diez años, en Barcelona, Ignacio Ellacuría llamó la atención sobre la dirección que la civilización del capital había tomado ("El desafío de las mayorías pobres", *ECA*, 493-494, 1989, p. 1075). Su diagnóstico sigue siendo válido hoy. Más aún, después de la desaparición de los socialismos históricos del este europeo. Los resultados de este capitalismo, ensobrecido y engegucido por el poder absoluto que ejerce sobre el destino de la humanidad, son indiscutibles y atemorizantes a la vez: (a) ampliación, como nunca antes, de la brecha que separa a ricos y pobres, tanto a nivel mundial, regional y nacional como dentro de los grupos humanos; (b) endurecimiento de los procesos de explotación y opresión, utilizando medios más sofisticados como la flexibilización del mercado laboral —es decir, liberalización para explotar la fuerza de trabajo, según las conveniencias del capital, lo contrario a la responsabilidad que la doctrina social de la Iglesia católica y la legislación del Estado le atribuyen—, el deterioro del empleo —es decir, una fuerza de trabajo menos cualificada, más mecanizada y con menores ingresos— y el desempleo masivo —cuyo elevado nivel hace que algunos comiencen a cuestionar el derecho al trabajo como tal y propongan abandonarlo como algo obsoleto, sin experimentar humillación o vergüenza—; (c) el deterioro del medio ambiente del planeta de manera acelerada e irresponsable, en particular de los recursos no renovables; (d) la deshumanización evidente de quienes acumulan para poseer riqueza y poder, de quienes compiten por el mero placer de la competencia, por la única satisfacción del triunfo sobre el adversario, sin saber a veces por qué o para qué compiten.

Al finalizar el siglo XX, la extensión y la profundización de la pobreza y la depredación de los recursos naturales, en particular de los no renovables, han llevado a unos niveles de inhumanidad hasta ahora desconocidos.

Ellacuría agregaba que la civilización del capital debe ser analizada desde lo que produce, de la misma manera que el estado del organismo vivo puede ser diagnosticado a partir de sus desechos. El análisis coprológico tiene la virtud de mostrar la realidad como en un espejo invertido. En consecuencia, si lo anterior son desechos inevitables de la civilización del capital —es decir, pertenece intrínsecamente a su realidad y sin ello no es posible obtener sus beneficios—, es evidente que tal civilización debe ser sustituida por otra que asegure a todos los habitantes del planeta una vida digna y sostenible: libre en cuanto todos seamos libres y humana en cuanto abra a todos la posibilidad para la amistad y el amor.

2. Juicio sobre El Salvador del siglo XX

Esta civilización del capital adquirió una forma propia en El Salvador. El Salvador de final del siglo XX es el resultado de un proceso histórico, en cuyas características se encuentra actualizada su realidad. En consecuencia, para aproximarse a la realidad salvadoreña es necesario analizar esas características; pero por razones de espacio, aquí sólo analizaremos las más determinantes, es decir, aquellas que han configurado el proceso a través del cual El Salvador ha llegado a ser lo que es al finalizar el siglo XX. El orden de la exposición no corresponde al de la importancia de estas características. Todas ellas constituyen el proceso de la realidad salvadoreña en estos cien años, aunque en determinados momentos alguna ha predominado sobre las demás. Ninguna de ellas ha permanecido inalterada, lo cual daría pie para sostener que la historia se repite, sino que todas ellas, en virtud de su interacción mutua, han ido experimentando los cambios que constituyen la dinámica procesual como un todo.

La primera de estas características es la distribución desigual de los recursos y la riqueza nacional, cuyo efecto ha sido acumulativo a lo largo del siglo. Al concluir éste y con las políticas actuales, el Estado salvadoreño no puede garantizar el desarrollo sostenible de El Salvador, si por tal se entiende la disminución de la pobreza a niveles inferiores al 5 por ciento. En la actualidad, los pobres salvadoreños representan alrededor del 50 por ciento de la población total. Es cierto que la pobreza experimentó una ligera disminución en la primera mitad de la década de los noventa, pero fue una mejora localizada en las zonas urbanas, debida más a la terciarización de la economía, a la afluencia de fondos provenientes de la asistencia internacional y a las remesas, pero que, en cualquier caso, ha remitido.

La reducción de la pobreza exige un crecimiento económico significativo y sostenido, es decir, un crecimiento que descansa en las estructuras productivas del país, más que en las expectativas de los funcionarios gubernamentales. Además, la economía debe crecer en aquellos lugares y en aquellas actividades donde los pobres se encuentran concentrados. Lo mismo debe decirse

del empleo, cuya expansión, en sí misma, no se traduce de manera automática en mayor bienestar. Para ello no sólo es necesario más empleo, sino uno de mayor calidad. Dicho de otra manera, con la clase de empleo que se está ofreciendo, fundamentalmente en las maquiladoras, no se puede hacer disminuir la pobreza a un nivel tolerable, porque su calidad es mala.

La segunda característica del proceso histórico salvadoreño es la concepción liberal clásica que afirma que la prioridad del Estado es la conservación del orden y, por lo tanto, éste se esfuerza por establecer mecanismos institucionales para controlar a la población. Cuando la persuasión falla, el Estado reprime. Los cuerpos de seguridad y, en último término, el ejército salvadoreño, estuvieron al servicio de la oligarquía y fueron muy efectivos, en particular en la zona rural, en cuanto a controlar y reprimir a la población. Con el paso de los años, las técnicas represivas se fueron volviendo cada vez más sofisticadas y brutales.

Al cerrar el siglo, la transición de postguerra se puso como uno de sus objetivos más importantes superar esta concepción liberal. Las instituciones públicas debían estar al servicio de la población y, en particular, debían proteger a los ciudadanos para que éstos, a su vez, pudieran gozar de sus derechos y libertades. Elementos centrales de esta nueva concepción son el respeto y la cercanía a la población, la participación de ésta en los asuntos públicos y su seguridad personal y colectiva. Es una concepción diametralmente opuesta a la que hasta entonces había regido el funcionamiento institucional del país, la cual, además, requería de una alta dosis de coacción militar. Sin embargo, la concepción más democrática de la transición ha encontrado fuerte resistencia en los núcleos tradicionales del poder oligárquico. Aunque nadie se atreve a rechazarla de manera abierta, todavía no ha podido ser puesta en práctica.

La tercera característica de la historia salvadoreña del siglo XX viene dada por los intentos reformistas. En efecto, a lo largo de estos cien años ha habido varias reformas importantes, pero ha habido muchos más intentos que no fructificaron, en cuanto que no alcanzaron su objetivo: limitar el control de la oligarquía sobre la economía nacional y el Estado. Por lo tanto, esas reformas tampoco alteraron el patrón de acumulación de la riqueza y la propiedad ni, por consiguiente, pudieron romper con la estructura del poder oligárquico.

Primero fue la oligarquía cafetalera, después vino la diversificación agroexportadora y los primeros intentos serios para industrializar la economía salvadoreña, a la sombra del mercado común centroamericano de los sesenta y, finalmente, el predominio casi absoluto del capital financiero. El surgimiento de una nueva forma de explotación capitalista no implica la anulación de la anterior, la cual es conservada, aunque de una forma subordinada. Ni siquiera los acuerdos de paz de 1992, tan ponderados por haber puesto fin a la guerra de doce años y por haber hecho espacio en la política nacional para la integración de la antigua guerrilla del FMLN y para ejercer, aunque

de manera limitada, la libertad de expresión, han podido romper con ese control férreo y determinante que el capital ejerce sobre la dirección del acontecer de la historia salvadoreña.

Es indudable que el intento reformista de mayor envergadura fue el de los acuerdos de paz, pero su capacidad transformadora fue recortada rápidamente, reduciéndola al ámbito político. El poder establecido calculó de manera cuidadosa sus concesiones: el mínimo aceptable para la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional. De hecho, el impulso decisivo para terminar con la guerra por la parte gubernamental no nació de su aprecio a la paz como valor supremo de la convivencia humana, sino de su necesidad práctica para poder introducir con éxito el programa de ajuste estructural en El Salvador y evitar así que el nivel y el ritmo de la acumulación de propiedad y riqueza experimentaran retrasos en relación a la región centroamericana y al resto del mundo. Por primera vez, el poder económico sacrificó el interés primordial de la Fuerza Armada de El Salvador al suyo propio. Hasta entonces, el ejército había sido intocable. Pero tal como escribió I. Ellacuría, en un editorial ya famoso y en unas circunstancias similares, a los militares no les quedó más remedio que saludar y ponerse a las órdenes del capital.

La cuarta característica configuradora de la realidad histórica salvadoreña es la globalización, hecha posible por el ajuste estructural y presentada como una falsa solución para el subdesarrollo. El crecimiento económico a partir de las exportaciones, aparte de no haber respondido todavía a las expectativas, ignora un hecho crucial y es que el motor principal del crecimiento se encuentra en la satisfacción de la demanda originada en el mercado interno.



Aún no se ha dado el caso en el cual el desarrollo haya sido alcanzado por la combinación del auge de las exportaciones con mercados internos deprimidos, desempleo y salarios bajos. Entre 1913 y 1993, las economías industrializadas, lejos de abrirse al comercio exterior, hicieron lo contrario, exceptuando Estados Unidos y Alemania, que se abrieron de forma cautelosa. Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a predicar el neoliberalismo una vez que la ventaja competitiva alcanzada por ambos, después de siglo y medio de proteccionismo, era inalcanzable para la mayor parte de los otros países. Los acuerdos de integración, presentados como una buena solución, no son más que oportunidades para que el sector privado constituya monopolios empresariales y financieros.

El problema fundamental de la economía salvadoreña no radica en el tamaño de su Estado ni en la magnitud del gasto público, sino en la constitución raquítica del primero y en la deficiencia y debilidad crónicas del segundo. En el capitalismo, el tamaño del Estado, medido por la proporción del gasto público total en relación al producto interno bruto, nunca ha dejado de crecer. Por otro lado, las transnacionales principales no tienen empacho en reconocer que, de una u otra manera, han sido beneficiadas por intervenciones de los gobiernos de aquellos países que las consideran propias. La desaparición del Estado nacional o su impotencia ante la fuerza arrolladora de la globalización es un mito. La verdad de las cosas es que las naciones tienen a su disposición diversas respuestas que no necesariamente conducen a la exclusión social o a políticas antiobreras, y si esas respuestas no son consideradas por los gobiernos nacionales, es por determinación expresa.

El impacto indiscutible de la globalización siempre se encuentra mediado por las políticas públicas, el desempeño gubernamental, la actividad del gran capital y la fuerza social de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, en una palabra, por la capacidad de movilización de la sociedad. El avance de la globalización capitalista es, en buena medida, consecuencia de políticas gubernamentales, las cuales responden a los intereses de los grupos capitalistas dominantes, hegemonizados por el capital financiero. La desaforada desregulación y liberalización de las finanzas internacionales no ha dependido de los desarrollos tecnológicos ni de las comunicaciones, tal como se suele argumentar. Estos últimos no son más que instrumentos, y, en cuanto tales, las permitieron. La responsabilidad directa recae sobre los gobiernos. Así, pues, la desaparición del Estado o su irrelevancia creciente no tiene asidero empírico. La misma liberalización ha sido impuesta por él en contra del parecer de la mayoría de la sociedad.

El predominio casi absoluto de las fuerzas del mercado y el culto a la eficiencia, entendida como la disminución máxima de los costos aun a costa del servicio, son consecuencias directas de la política gubernamental. Que esta política sea más teórica que práctica es secundario en este caso, porque la tenden-

cia es evidente. Lo que aquí se quiere enfatizar es que la globalización, en sí misma, no es la cuestión, sino la respuesta del gobierno salvadoreño, que ha asumido las tesis neoliberales con muy poca crítica. Los gobiernos de ARENA han impulsado, sin titubear, una política que facilita al gran capital transnacional, apoyado por el salvadoreño, la penetración y la conquista de aquellas actividades más rentables de la economía nacional. Los gobiernos de ARENA hasta ahora han creído, de una manera ingenua y acrítica, en las potencialidades civilizadoras del capital transnacional, desconociendo la larga experiencia latino y centroamericana, la cual apunta en sentido contrario; pero tampoco se pueden pasar por alto los considerables beneficios económicos y sociales que esta postura deja a los capitalistas que militan en ARENA. Cuando se entra en el área de la rentabilidad del capital, el nacionalismo pasa a un segundo plano.

La quinta nota que ha configurado la realidad salvadoreña a lo largo de esta centuria es la persistencia de la violencia que, desde la reforma liberal de finales del siglo XIX, se estableció en El Salvador de manera permanente. La reforma liberal despojó a las comunidades campesinas de tierras, cuya posesión se remontaba a los orígenes coloniales, y lanzó a sus miembros al mercado de trabajo sin ninguna protección. Es así como la constitución de la gran propiedad cafetalera se caracterizó por el despojo y la usurpación de una propiedad campesina todo lo improductiva que se quiera, pero tan privada como la cafetalera que la sucedió. La resistencia de las comunidades adoptó formas violentas, en levantamientos campesinos y actos extremadamente crueles como cortar las manos a los jueces que midieron y repartieron la tierra. Desde entonces fue necesario vigilar de manera especial a una masa rural de jornaleros pre-dispuesta a la rebeldía y poco respetuosa de la nueva propiedad privada.

Del campo, la violencia pasó a la ciudad, en las primeras décadas del siglo XX, y desde entonces no ha podido ser desterrada de ella. La represión de 1932 es uno de sus hitos más sangrientos, crueles y persistentes. A ésta siguieron otras represiones del movimiento popular y de la oposición política, menos dramáticas quizás, pero igualmente sangrientas, hasta alcanzar su expresión más perversa en los grupos paramilitares de la década de 1970, los escuadrones de la muerte de la de 1980 y las bandas de secuestradores de la de 1990.

El problema fundamental de la economía salvadoreña no radica en el tamaño de su Estado ni en la magnitud del gasto público, sino en la constitución raquítica del primero y en la deficiencia y debilidad crónicas del segundo.

En El Salvador ha habido muy poca tolerancia para la disidencia y la crítica. Los disidentes y la oposición política de todos los tiempos han sido rechazados y



condenados como rebeldes, subversivos y comunistas; aún en las postrimerías de la transición, la oposición y la disidencia son descartadas como izquierdismo y no porque sus razonamientos y juicios sean irrelevantes o impertinentes. La frecuencia e intensidad de estos calificativos, que con demasiada frecuencia llevaron y justificaron la agresión física y psicológica, han dependido de la fuerza de la disensión y la oposición. Subversivo y comunista fueron las etiquetas preferidas por la oligarquía —aunque también utilizó otras en la década de 1970— para designar a cualquiera que demandara un cambio social o económico que, de alguna manera, afectara sus intereses. En las décadas de 1970 y 1980, estas etiquetas fueron aplicadas a políticos, maestros, sindicalistas, estudiantes, profesionales, sacerdotes, obispos, religiosas, catequistas, delegados de la palabra e incluso a oficiales militares, y de una manera general, a la organización popular autónoma. No es mera casualidad que el mayor número de víctimas de la intolerancia se encuentre en estos sectores.

En 1994, el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política —un largo eufemismo para no llamar por su nombre a los escuadrones de la muerte— comprobó la existencia de estas estructuras ilegales armadas, las cuales estaban integradas por funcionarios estatales y personas particulares, que operaban en la clandestinidad, que poseían una capacidad logística, económica y política muy amplia, que operaban por igual en el campo y la ciudad con capacidad para permanecer inactivas o entrar en acción en el momento que estimasen adecuado, y, finalmente, que mantenían vínculos con redes complejas del crimen organizado y, en consecuencia, combinaban acciones de orden político con el delito común.

Aunque las víctimas mortales de la violencia intencional tienden a bajar al finalizar el siglo, el nivel es todavía muy elevado. Los homicidios intencionales, según el registro de la Fiscalía General de la República, superan los seis mil al año, lo cual equivale a 111 muertes por cien mil habitantes, siendo 20 la tasa promedio, establecida por la Organización Panamericana de la Salud. Curiosamente, las tasas más elevadas no se registran en el área metropolitana de la capital, donde se encuentra concentrada la población del país, sino en la zona occidental (Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán), precisamente ahí donde se ensañó la represión de 1932. La mayor parte de estas muertes son ocasionadas con armas de fuego y artefactos explosivos y, en menor proporción, por armas blancas y golpes. La mayor parte de las víctimas son varones, entre los 15 y 34 años de edad. Por estas y otras razones, la Organización Panamericana de la Salud trata este fenómeno como un problema de salud pública. El impacto de la violencia en la economía salvadoreña es tan grave que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que ésta ya es una rémora más para el desarrollo sostenible del país. No es éste el lugar para analizar las causas del fenómeno, cosa que, por otro lado, la UCA ya hace en otros sitios, pero sí cabe señalar que la mayor parte de los crímenes es cometida con armas de fuego y municiones adquiridas de forma legal.

Paradójicamente, la transición de postguerra no condujo a El Salvador a la paz social, sino a una especie de guerra informal de todos contra todos, que no conoce fronteras y en la cual, la sociedad en su conjunto, armada libremente, se destruye a sí misma, constituyendo los varones jóvenes el grueso de las víctimas. Y es que la sociedad salvadoreña está acostumbrada a hacer uso de la fuerza sin otra restricción que la fuerza del adversario, lo cual es posible por el acceso irrestricto a las armas de fuego y por la impunidad. Es un hecho comprobado que la mayor parte de los crímenes no es investigada y, por lo tanto, éstos son atribuidos a desconocidos.

La sexta nota, aunque no por eso la menos importante, es la intervención de Estados Unidos en el proceso histórico salvadoreño. Una intervención que, en algunos momentos, ha sido decisiva porque impuso e hizo prevalecer la voluntad de esta potencia mundial en asuntos internos salvadoreños o regionales centroamericanos. Washington determinó, en gran medida, el futuro de los golpes de Estado y de sus propuestas reformistas, desde el del general Hernández Martínez. El destino de los gobiernos y de la unión centroamericana dependió siempre de la política exterior estadounidense y de la voluntad particular de sus diplomáticos. En varias ocasiones, El Salvador fue utilizado como peón del ajedrez estadounidense regional, siendo el caso más notable la utilización del aeropuerto militar de Ilopango para abastecer a la contrarrevolución nicaragüense y traficar con drogas, durante el gobierno demócrata cristiano de Duarte.

A medida que avanzó el siglo, Washington fue asumiendo un papel cada vez más protagónico en la política interna salvadoreña hasta el extremo de

conducir la guerra civil y la represión que la acompañó, en la década de 1980. Correspondientemente, la posición de Estados Unidos fue determinante en la mesa de negociación del conflicto y en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero sus responsabilidades políticas y morales no concluyen aquí, sino que Washington, después de su papel determinante en la dirección de la guerra, está obligada a contribuir de la misma forma en la reconstrucción social de El Salvador. En la actualidad, la política estadounidense tiene un perfil bajo, pero no por eso es menos determinante. El Salvador muy difícilmente puede negarse a los requerimientos de Washington, sea por razones de orden económico, ideológico o de poder.

Aunque estas intervenciones respondieron a la política exterior estadounidense del momento —la diplomacia de las cañoneras, del dólar, del buen vecino, de la guerra fría y la contrainsurgencia, y de la internacionalización del capital—, ésta fue ejecutada por diplomáticos, militares y agentes de inteligencia de toda clase, quienes mezclaron las directrices oficiales con su visión particular de la realidad salvadoreña y no pocas veces también con sus propios intereses. No hay que olvidar tampoco que la política exterior estadounidense está determinada en no poca medida por la política interna y por los intereses de las instituciones gubernamentales de ese país, las cuales no siempre coinciden con las de la Casa Blanca o el Congreso. En resumidas cuentas, los intereses salvadoreños han contado poco y cuentan poco, o, dicho de una manera positiva, sólo cuentan en la medida en que coinciden con los de Washington y sus funcionarios.

La penúltima nota es la cultural e ideológica. En este ámbito, El Salvador ha experimentado cambios radicales a lo largo del siglo: la represión de 1932 puso fin a lo que quedaba de las estructuras nativas, el mercado común centroamericano amplió las fronteras del bienestar social, pero no por mucho tiempo, ni con la profundidad necesaria; el conflicto social y la guerra subsiguiente desarticularon las estructuras sociales fundamentales y la postguerra no ha podido reconstituirlas, al contrario, ha profundizado esa desarticulación con su individualismo exacerbado y la violencia social. La corriente migratoria hacia el norte de América no sólo abrió horizonte a centenares de miles de salvadoreños y envió dólares a quienes permanecieron en el país, sino que con ellos vinieron conductas y expresiones estadounidenses, reforzadas por la penetración de los medios de comunicación de masas. De esta manera, la identidad cultural está constituida por una serie de contradicciones que le impiden, hoy por hoy, consolidarse y convertirse en punto de referencia para la vida de la población. Esta impotencia ha hecho del folclore la expresión más auténtica de la identidad nacional. Temas como el género, la infancia y el medio ambiente han ido ganando espacio, en parte, por influencias del entorno internacional.

Paradójicamente, la transición de postguerra no condujo a El Salvador a la paz social, sino a una especie de guerra informal de todos contra todos, que no conoce fronteras y en la cual, la sociedad en su conjunto, armada libremente, se destruye a sí misma, constituyendo los varones jóvenes el grueso de las víctimas.

Finalmente, está la Iglesia católica, la cual comenzó siendo un apoyo importante para la república cafetalera de las primeras décadas del siglo. Su apoyo a una religiosidad popular ajena a la realidad social fue determinante para que el orden oligárquico fuese aceptado sin protesta. Pero a finales de la década de los sesenta, ambas realidades cambiaron. La Iglesia institucional comenzó a tomar distancia del poder político, económico y militar, y, a cambio, se aproximó cada vez más a la mayoría de la población empobrecida. Paralelamente, la religiosidad popular fue tomando conciencia de su papel legitimador de un orden injusto y violento. En el mundo rural, pero también en el de la marginalidad urbana, fue surgiendo, apoyada en y por las estructuras religiosas, una nueva conciencia crítica y dispuesta a comprometerse en la lucha por la transformación de ese orden.

Mons. Romero fue el arzobispo que puso fin a la secular identificación entre la Iglesia y el Estado. El arzobispo independizó a la Iglesia del Estado, al cual ya no consideró su interlocutor privilegiado. Su lugar fue ocupado por el pueblo salvadoreño y, en particular, por el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, Mons. Romero se convirtió en la voz de esa mayoría silenciada por el miedo y la represión. La organización popular, en particular la rural, actor importante de las luchas sociales de la década de los setenta y de la guerra, en la siguiente década, se desarrolló a la sombra de la institución eclesial, aunque muy pronto se independizó de ésta. Al finalizar el siglo, predomina una tendencia que se mueve en sentido contrario. La Iglesia institucional se esfuerza por cerrar la brecha que la separó del Estado, a costa de alejarse de los intereses y del sentir del pueblo. Este esfuerzo es acompañado de la infantilización de la religiosidad popular, con capacidad para congregarse grandes masas, pero sin profundidad alguna en la fe.

En El Salvador, al igual que en otros países centroamericanos, el siglo deja, en la mayor parte de sus habitantes, la sensación de fracaso. Existe la percepción, hasta cierto punto fundamental, de que El Salvador como tal no es viable sin cambios estructurales radicales. A crear esta percepción han contribuido algunos sectores de la derecha, los cuales añoran un regreso al régimen autoritario y policíaco. Para ello sacan provecho del desengaño y del cansancio predominantes no sólo entre los sectores populares, sino también

entre las clases medias. De esta manera, lo que la transición de postguerra no ha podido entregar a la sociedad salvadoreña quisiera ser alcanzado a través de un régimen autoritario que impusiera la ley y el orden ("Nubarrones sobre el horizonte de El Salvador", *ECA* 612, 1999, 825). Con todo lo atractiva que esta propuesta pudiera parecer, plantea más interrogantes sobre su viabilidad que posibilidades reales de solución.

3. La interpelación de los mártires a la sociedad salvadoreña

Este panorama desolador no deja otra alternativa que insistir en la necesidad de revertir la realidad histórica actual, tal como los mártires lo exigieron, para lo cual vivieron y por lo cual entregaron su vida. El que esta reversión sea hecha desde la perspectiva de los mártires no es muy relevante; lo realmente importante es que la realidad actual debe ser revertida y sin pérdida de tiempo. Ahora bien, aquí se adopta la perspectiva de los mártires porque éstos poseen la fuerza necesaria para sacudir los cimientos de la estructura social actual y porque son fuente de inspiración para quienes trabajan por cambiarla y revertirla.

Revertir la historia, diría I. Ellacuría, quiere decir cambiar la dirección del proceso y comenzar de nuevo, aunque no desde cero. Esto querría decir que la transición de postguerra no ha llevado a El Salvador a la democratización esperada y que si no altera el rumbo actual, no podrá hacerlo de ninguna manera, en el futuro próximo. Los cambios hechos en la esfera política no pueden ser extrapolados al todo de la realidad salvadoreña. Por eso, lo alcanzado no es satisfactorio y, sin cambio de rumbo, el futuro inmediato tampoco augura nada bueno. Los cambios ocurridos hasta ahora no son suficientes para revertir la realidad actual, no por lo menos en cuanto a la radicalidad y la profundidad requeridas.

El nuevo comienzo al cual los mártires invitan significa colocar en el centro del quehacer social y personal la satisfacción de las necesidades de todos y todas, en especial la de las mayorías populares, la creación de condiciones para ejercer la libertad cuando hay que asumir opciones personales, y el establecimiento de un ámbito para cultivar la creatividad individual y comunitaria, que permita el surgimiento de formas de vida y cultura nuevas, y la construcción de relaciones nuevas con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios. La meta última es la construcción de una paz real, es decir, aquella cuyo fundamento sea la verdad y cuya norma sea la justicia.

El compromiso con la construcción de este nuevo comienzo es contrario a la comodidad personal, a veces legítima e incluso merecida, y empuja a no desistir, a pesar de los años, las limitaciones propias y las adversidades. Es una interpelación contraria al conformismo de los pocos privilegiados que han conseguido bienestar, al tener su vida personal resuelta y al contar con el espacio y los medios para desarrollar proyectos personales. Acoger la interpelación de los mártires, es un deber de honradez para con quienes dieron su

vida generosamente por un futuro del cual el presente está aún muy lejano. Rehuir el compromiso con la reversión de la historia, utilizando como justificación los logros parciales, lleva inexorablemente a contemporizar con la pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad.

Los mártires son interpelación para los hombres y las mujeres de buena voluntad y para quienes desde la fe cristiana se comprometen con la lucha por la justicia. Cabe, sin embargo, distinguir, tal como lo propone Jon Sobrino, entre los mártires pasivos o anónimos y los activos. Los primeros, en su misma realidad trágica, son una exigencia absoluta para iniciar un nuevo comienzo, orientado a su liberación. Los otros, aquellos que dedicaron su vida a la transformación de esa realidad injusta y a quienes, por eso mismo, les arrebataron su vida injusta y violentamente, invitan a seguir la tarea interrumpida de forma tan abrupta. No es, pues, mera casualidad que el pueblo salvadoreño tenga tantos mártires en su seno. Ellos son testigos privilegiados de la injusticia y la violencia, pero también son interpelación constante para aproximar la utopía con la ayuda de la profecía.

Mons. Romero fue el arzobispo que puso fin a la secular identificación entre la Iglesia y el Estado. El arzobispo independizó a la Iglesia del Estado, al cual ya no consideró su interlocutor privilegiado. Su lugar fue ocupado por el pueblo salvadoreño y, en particular, por el pueblo de Dios.

En cuanto a la interpelación a no conformarse con logros parciales, puesto que, por muy importantes que éstos puedan ser, no dejan de ser parte de un proceso y, en este sentido, provisionales y limitados, los mártires constituyen una invitación a la radicalidad. Cuando lo que se encuentra en cuestión es la vida de la mayor parte de la población salvadoreña no se puede sino ser radical. El comienzo sólo es nuevo en realidad si es radical, porque solamente siéndolo se puede ir a la raíz de las fuerzas que determinan la realidad salvadoreña. La radicalidad no se contrapone a la prudencia, ni siquiera a cierto pragmatismo sano, sino a la superficialidad y al conformismo fácil. No hay, pues, que temer a la radicalidad, sino a su contrario.

La radicalidad exige, sin embargo, introducirse en medio del conflicto histórico, ahí donde se decide la vida y la muerte de las mayorías. La transición salvadoreña no ha superado el conflicto, como algunos quisieran dar por sentado, juzgando con precipitación la realidad actual. Esto es lo que quieren dar a entender cuando aseguran que El Salvador ha cambiado, implicando así que ya no hay razón para el conflicto, sino sólo para el consenso y la propuesta. Con la misma trivialidad con la que quisieran olvidar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, intentan

desconocer que la estructura social sigue siendo, en lo fundamental, injusta y, por consiguiente, violenta. En virtud de este desconocimiento, pretenden deslegitimar a quienes exigen ir a las causas últimas de la conflictividad. Pero, al finalizar el siglo XX de El Salvador, la injusticia estructural se impone de una manera brutal. A ello se debe que la violencia predomine y que la realidad siga siendo conflictiva.

La superación de la guerra es incuestionable, pero no la del conflicto social, cuyos orígenes más recientes están en la república cafetalera de finales del siglo XIX. Al no haber desarraigado las causas estructurales de la guerra, el conflicto persiste y se manifiesta con inusitada violencia con una periodicidad alarmante. Es así como la estructura de la sociedad salvadoreña es intrínsecamente conflictiva y mortal, en cuanto sigue causando víctimas humanas. Ante ellas surge la pregunta insoslayable: qué debo hacer ante las víctimas, qué bando debo tomar. El hombre y la mujer de buena voluntad y el cristiano o la cristiana con mucha mayor razón responden sin dudar. Su puesto está al lado de las víctimas. Adoptar esta postura implica solidarizarse con ellas, pero sobre todo trabajar activamente para suprimir las condiciones que las producen. Y esto no puede hacerse sin introducirse en el conflicto, no porque éste sea buscado de manera directa, sino porque erradicar las condiciones que producen víctimas lleva a la confrontación con los poderes responsables de las mismas. Tomar partido por las víctimas complica la vida e incluso puede acabar con ella, como es el caso de los mártires, cuyo décimo aniversario conmemoramos.

Los mártires no sólo interpelan, sino que, además, son punto de referencia obligatorio y fuerza para continuar. Ellos son los que hacen que la voz de la justicia ya nadie la pueda callar, tal como reza el afiche oficial del décimo aniversario, donde se recogen esas palabras de Mons. Romero. De ahí que la conmemoración de estos mártires —diez años de los de la UCA y veinte de Mons. Romero— sea tan importante para el pueblo salvadoreño, la Iglesia y la universidad misma. Y de ahí también, como contrapartida, el interés del poder que los asesinó y después encubrió su crimen en restarles importancia y en relegarlos al olvido, pretextando una reconciliación falsa.

El recuerdo siempre ha sido una forma eficaz de resistencia y de protesta ante las injusticias y violencias pasadas, pero también ante las actuales. Los mártires, desde la impotencia de su sacrificio y desde la humillación de su asesinato y del encubrimiento, ponen en evidencia al poder injusto que los asesinó y que permite e incluso acelera la muerte de decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas, víctimas de la pobreza y la violencia institucionalizada. Es así como —señala Jon Sobrino— la realidad de los pobres alcanza su máxima expresión en ellos. Los mártires han sufrido el empobrecimiento extremo al dejarse arrebatar su vida y al permitir que a la humillación de la muerte se agregue la del encubrimiento, incluyendo investigaciones que no conducen a ningún lado, testigos falsos y juicios amañados.

Revertir la historia, diría I. Ellacuría, quiere decir cambiar la dirección del proceso y comenzar de nuevo, aunque no desde cero. Esto querría decir que la transición de postguerra no ha llevado a El Salvador a la democratización esperada y que si no altera el rumbo actual, no podrá hacerlo de ninguna manera, en el futuro próximo.

Pero el recuerdo es también anuncio de utopía y actualización de la esperanza, en cuanto mantiene vivo el ideal de una sociedad plenamente humana, fraterna y solidaria. Los mártires unen de manera única e indisoluble historia y salvación, realidades que quienes se resisten a los cambios quisieran mantener separadas, precisamente, para que nada cambie. Además de preocuparse por las personas, los mártires consagraron buena parte de su vida a buscar el bienestar del pueblo. Consideraron su misión, por razones de orden humanitario y, o evangélico, contribuir de manera activa a la liberación del pueblo de sus opresiones, personales y colectivas. Recuperando la formulación de Ellacuría, dedicaron buena parte de su vida a bajar de la cruz al pueblo crucificado, quisieron salvarlo del dolor y la muerte segura, bajándolo de la cruz. Sobrino recuerda que para Mons. Romero, salvar es decir la verdad en nombre del pueblo. Sus homilias quisieron ser la voz del pueblo salvadoreño y lo consiguieron. Para Mons. Romero salvar es también dar esperanza cuando no hay salida aparente, asegurando que Dios tiene siempre la última palabra. Para I. Ellacuría, es revertir la historia, comenzando de nuevo —y no sólo introducir cambios parciales—, es promover la justicia, anunciar la utopía, trabajar por construir la civilización del amor, la cual sólo puede adquirir realidad si se construye sobre una civilización de la pobreza. En definitiva, salvar es anunciar que en el horizonte “se avizora el Dios salvador, el Dios liberador”.

Para quienes desde siempre han sido parte del orden establecido y para quienes se han integrado a él recientemente, montados sobre la transición de postguerra, la utopía y la radicalidad que aquella exige pertenecen a un pasado lejano y superado. Por lo tanto, los mártires que vivieron con radicalidad la utopía y, precisamente, por fidelidad a ella dieron su vida, pertenecerían también a ese pasado, que les parece remoto e incluso algunos se atreven a desconocer. Su sacrificio habría tenido sentido entonces, pero no ahora. Para quienes han sido parte del orden establecido, por motivos obvios, la utopía y la radicalidad no tienen razón alguna de ser. Pero quienes se han integrado a él después de haberlo combatido incluso con las armas, sin conseguir su objetivo, pretenden descalificarlas por considerarlas inalcanzables e inútiles, desde una presunta autoridad derivada de su pasado rebelde. En realidad, esta postura responde más al desengaño ante la enormidad de la tarea que se

impusieron a sí mismos y a cierto deseo por encontrar estabilidad y seguridad al llegar a la madurez que a razonamientos de peso. Es así como los principios revolucionarios han sido sustituidos por un pragmatismo craso y no pocas veces también oportunista. Esta práctica se engaña sobre las posibilidades para continuar la lucha por transformar la sociedad desde dentro y desde arriba del orden establecido.

Esta postura contrasta con dos realidades incuestionables. La primera es la del pueblo condenado a la pobreza, la enfermedad y, en último término, a la muerte lenta del marginado. Un pueblo que, como diría I. Ellacuría, está crucificado, que espera ser bajado de la cruz y salvado del sufrimiento y la muerte. La segunda es la vida de los mártires mismos, quienes no entregaron su vida por algunas liberaciones parciales, sino por algo más profundo y universal, por la liberación del pueblo salvadoreño. Si aceptaron algunas liberaciones parciales fue sin perder de vista la utopía y sin ceder en la radicalidad que ella exigía. Desde esta perspectiva, los mártires son luz que penetra en las profundidades de la transición de postguerra y de los corazones de sus actores, poniendo al descubierto sus miserias y egoísmos. Por eso, los mártires incomodan a quienes, cansados o desengañados, han abandonado sus antiguas rebeldías y radicalismos y los han sustituido por el simple pragmatismo y la comodidad; pero para quienes dedican su vida a trabajar por una humanidad libre y por el reino de Dios, son fuente de inspiración y fuerza. En ellos encuentran sentido real y verdadero, pleno y plenificante, para su vida personal y social.

Diez años después, en el caso de los mártires de la UCA, y veinte años más tarde, en el de Mons. Romero, éstos y todos los mártires del pueblo salvadoreño nos preguntan si como ciudadanos, como profesionales, como universitarios y como creyentes seguimos sus huellas y orientamos nuestras vidas a trabajar por la liberación de las mayorías empobrecidas y oprimidas. La necesidad de hacer adaptaciones y ajustes de toda clase, porque las situaciones no son iguales y porque cada uno es como es, no obvia la cuestión. Ellos iluminan la opción ética y cristiana, y muestran que es posible vivir con verdad y generosidad el compromiso con la vida del pueblo.

San Salvador, 10 de enero de 2000.